



Daniel Quinteros Rojas
Sociólogo

Durante los últimos tres años, Tarapacá vivió un proceso necesario: ordenar. Frente a un escenario marcado por el aumento de homicidios, el ingreso irregular por pasos no habilitados y una persistente tasa de desempleo e informalidad laboral, era urgente intervenir con decisión y responsabilidad. La región requería recuperar capacidades estatales para hacer frente a fenómenos complejos y poco conocidos, lo que implicó avanzar con gestión, inversión y legislación en áreas largamente olvidadas por la política y el centralismo. Ese esfuerzo dio frutos. Entre 2021

y 2024, los homicidios disminuyeron un 48,1%, los ingresos irregulares se redujeron un 48,3%, y la región recuperó sus niveles de crecimiento y empleo pre pandémicos. Estos avances no son casualidad: responden a políticas públicas que apostaron por el diálogo, la articulación interinstitucional y una presencia activa del Estado en el territorio para gestionar políticas basadas en evidencia y no solo en creencias.

SIN EMBARGO, NORMALIZAR NO BASTA.

Porque si el objetivo es solo estabilizar, corremos el riesgo de volver a un equilibrio que ya era desigual. Y si no se transforma el modelo que reproduce esa desigualdad, los problemas volverán con otros rostros. En ese marco, Tarapacá necesita una política que no se limite a administrar su injusta realidad, sino que nos permita proyectar un futuro con desarrollo para todos, y no solo

Normalizar no basta: hacia una política transformadora para Tarapacá

crecimiento para algunos. Eso implica abrir debates postergados y tomar decisiones que incomodan, pero que son urgentes y necesarias para avanzar.

Un claro ejemplo es el actual debate sobre la Zona Franca de Iquique: un instrumento que ha sido clave en la economía regional, pero que hoy enfrenta el desafío de repensar el sentido y las bases de su modelo. Su régimen de excepcionalidad tributaria ha permitido el desarrollo de mercados altamente dinámicos, como la comercialización de vehículos usados, ropa de segunda mano y un sinnúmero de mercancías provenientes del capitalismo global. Estos circuitos generan empleo y dinamismo económico, pero también invitan a preguntarnos: ¿cómo nos hacemos cargo de los impactos medioambientales, de la gestión de residuos, o de las condiciones laborales de quienes sostienen estas cadenas? ¿No ha llegado acaso el momento de atrevernos a pensar ZOFRI no solo

como una mera excepción arancelaria, sino como una potente herramienta de economía política que permita forjar empleos dignos, innovación verde y soberanía productiva en el corazón del desierto?

Preguntas como éstas incomodan, pues obligan a priorizar, redistribuir y transformar. No se trata de desechar diagnósticos ni de renunciar a la técnica. Todo lo contrario: necesitamos más evidencia y mejores datos para sustentar decisiones transformadoras. Pero también necesitamos voluntad política para hacer algo con esa evidencia, y no solo confirmar la desigual realidad. Lo que está en juego no es solo una disputa ideológica, sino la necesidad concreta y material de soñar Tarapacá desde una política que no se limite a ordenar el presente, sino que busque cambiar el porvenir. Una política valiente y con principios que abra nuevos horizontes, porque no basta con normalizar, hay que transformar.